



LIBERTAD Y DESARROLLO

RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1336

15 de Junio de 2018

IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES: NUEVO DEBER DEL ESTADO

BOLETÍN 11758-07

CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO

BOLETÍN 11777-05

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1336

15 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE

1.

IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES: NUEVO DEBER DEL ESTADO

BOLETÍN 11758-07 3

2.

CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO


BOLETÍN 11777-05 9

IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES: NUEVO DEBER DEL ESTADO


DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11758-07

REFERENCIA	Modifica la Carta Fundamental para establecer el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	De la Mujer y la Equidad de Género y Secretaría General de la Presidencia
INGRESO	29 de mayo de 2018
ARTICULADO	Artículo único, que modifica el artículo 1°, inciso quinto, de la Constitución Política de la República

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

No resulta evidente la necesidad de modificar la Constitución Política de la República para incorporar, una vez más, la igualdad entre hombre y mujeres, dado que otros preceptos del mismo texto constitucional ya la han establecido. Dado lo anterior, la reforma entonces vendría a reforzar un concepto que ya está establecido. Si esto es así, cabría entonces preguntarse si se trata de un cambio inocuo o no, toda vez que con él se mandata al Estado para promover dicha igualdad, esto es, se le exige un rol activo en la materia. La modificación constitucional que se viene proponiendo debe ser entendida e interpretada a la luz de las demás disposiciones de la Constitución, que precisamente resguardan la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad y garantizan la libertad de trabajo, de asociación y de empresa, entre otros derechos. De esta forma, pretender efectuar una interpretación maximalista e intrusiva del deber de promoción que se le impone al Estado en esta materia, basándose en la norma propuesta, resulta errado 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Establece, como deber del Estado, promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria 

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

QUÓRUM

Dado que se trata de modificar el Capítulo I de la Constitución Política de la República (“CPR”), corresponde señalar cuál sería el quórum de aprobación. Conforme al artículo 127 de la CPR, en el Senado, asumiendo que hay 43 senadores en ejercicio, los 2/3 alcanzan a 30 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados, estando todos sus miembros en ejercicio, el quórum de aprobación sería de 100 diputados.

ANTECEDENTES

Desde la Constitución de 1833 (artículo 12 N°1) y la de 1925 (artículo 10 N°1), se viene incluyendo como garantía constitucional “la igualdad ante la ley”; el texto primitivo de la CPR de 1980 lo hizo en tres oportunidades expresamente: en el artículo 1° (“los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”); en el artículo 19 N°2 al garantizar “la igualdad ante la ley” y en el mismo artículo N°3 al garantizar “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

La reforma constitucional efectuada mediante la Ley N° 19.611, de 1999, agregó en el artículo 19 N°2 una explicitación para precisar que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”. Esta es la formulación actual de la garantía, en lo que concierne a la Constitución

vigente. Asimismo, mediante dicha ley también se reemplazo el término “hombre” del artículo 1 de la Constitución, toda vez que, conforme se señaló al promoverse la reforma, no cubría la diversidad de la especie humana, reemplazándose por personas.

LO QUE AHORA SE PROPONE

Se trata del deber del Estado de promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres. Además se agrega, en oración de gerundio, “evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria”. De esta manera, se insiste en el texto constitucional respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, imponiendo eso sí un nuevo deber constitucional al Estado consistente en que éste debe promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.

Partiendo por esto último, la no discriminación arbitraria ya está asegurada en términos amplios en el artículo 19 N°2 cuando señala que “ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias”. En verdad, el mundo está lleno de diferencias entre distintas personas o situaciones, de manera que la Constitución lo que prohíbe son solo las arbitrarias, esto es, las diferencias injustificadas, no razonables

ni fundadas. Aún cuando pudiere asignarse el vocablo “discriminación” el sentido de “diferencia arbitraria”, se ha querido ser expreso en prohibir las discriminaciones arbitrarias. De hecho, según el Diccionario RAE, discriminación es acción y efecto de discriminar; y discriminar es “seleccionar excluyendo” o bien “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera”.

Abusar, por su parte, significa usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o alguien”. Y abuso es la acción y efecto de abusar. Está bien que se prohíba.

Asimismo, evitar la violencia es también una situación deseable y que puede tener muchas manifestaciones, de las cuales, las más graves han pasado a integrar diversos tipos penales, de manera que nuevamente está bien que se prohíba.

Ahora bien, preciso es destacar que sin perjuicio del reconocimiento constitucional, en la medida que nuestra sociedad presente casos de discriminación arbitraria, violencia o abuso, será necesario instar por su corrección no solo en el ámbito legal o constitucional sino también instar por generar cambios conductuales, culturales y educacionales. Asimismo, esta materia, como ya hace la Constitución, no solo debiera abordarse desde la perspectiva de hombres y mujeres sino que debiera constituir una preocupación en general. La discriminación arbitraria, el abuso y la violencia son males que debieran evitarse en general respecto de toda la población y no acotado a un grupo o grupos específicos.

En rigor, lo nuevo de la proposición es precisamente el deber del Estado, puesto que, como ya se ha señalado, la no discriminación arbitraria propiamente tal está asegurada desde hace tiempo en el marco

constitucional. Siendo así, la proposición merece algunas consideraciones. Por un lado, pareciera que, sin perjuicio, del punto político que se desea hacer al efecto, jurídicamente insistir en la igualdad resulta reiterativo. Por otra parte, la norma, en tanto genera un deber de promoción al Estado, es susceptible de interpretaciones que es preciso delimitar. Aún cuando se comprende que la iniciativa puede ser muy útil en cuanto sensibiliza a las personas respecto a un tema muy relevante, y lo eleva a nivel de norma constitucional, en el mejor de los casos la reiteración de la igualdad de derechos y dignidad representa una suerte de complemento a lo que hoy ya está normado en la Constitución. En efecto y como se señaló, la Constitución viene asegurando la igualdad ante la ley, lo que incluye la no discriminación o la no diferenciación arbitraria, desde los inicios de nuestro constitucionalismo en el siglo XIX.

Sobre el sujeto obligado a evitar la violencia, abuso, etcétera, se sostiene que es el Estado. Es un problema habitual en las oraciones de gerundio. Así en la norma propuesta, el gerundio se referiría al sujeto de la oración anterior, esto es al Estado. Es así como debiera leerse. Así, por lo que toca al deber del Estado de promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de abuso o violencia o discriminación arbitraria, se trata de una declaración abstracta, como es lo natural en las normas jurídicas. Por ello resulta relevante entender de qué manera se deberá proceder a esa promoción. Interpretaciones maximalistas de la norma, intrusivas de la esfera privada, no se condicen con lo dispuesto en otros pasajes de la misma Constitución. Una interpretación armónica de las normas constitucionales lleva a concluir que la reforma debe ser entendida en el marco de estos límites. Así por ejemplo, pretender imponer, al amparo de esta reforma, iniciativas del tipo cuotas de género en gobiernos corporativos de empresas

o una determinada distribución de cargas en atención al género no resultarían conformes con la Constitución, pues entrarían en conflicto con otras importantes normas de la Carta Fundamental, como la autonomía de los cuerpos intermedios, libertad de empresa, de asociación, de trabajo, etc.).

INCORPORACIÓN DE LA NORMA A LAS BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

Por último, cabe mencionar que en cuanto la modificación se incorpora al artículo 1º de la CPR, del Capítulo de las “Bases de la Institucionalidad”, se eleva la norma al rango de un principio que

inspira el resto del ordenamiento jurídico, dando con ello una señal política robusta, sin perjuicio de que, jurídicamente, esto ya se encontraba plasmando en la Constitución.

Las Bases de la Institucionalidad constituyen los principios esenciales en torno a los cuales se organiza el resto de la Constitución y las leyes y normativa. Además, estos principios iluminan la interpretación que se hace del resto de las disposiciones constitucionales y, en su calidad de norma de rango superior, del resto del ordenamiento jurídico. Tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y tribunales de justicia, el artículo 1º de la CPR es la disposición más relevante y trascendente que establece la Constitución. Por ello, y en el evento de su incorporación, los elementos que componen este nuevo deber del Estado, para una adecuada interpretación de la norma, no deben entrar en conflicto con otras disposiciones del texto constitucional ■■■

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Agréguese en el inciso 5° del artículo 1° de la Constitución Política de la República, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente frase:

“Asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.”¹.

1 El inciso quinto del artículo 1°, quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 1°.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.

CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11777-05


REFERENCIA	Crea el Consejo Fiscal Autónomo
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIO	De Hacienda
INGRESO	4 de junio de 2018
ARTICULADO	14 artículos permanentes y 3 transitorios

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

A casi diez años de la implementación de la regla de Balance Estructural (BE), el año 2010, la autoridad fiscal citó a una comisión de expertos -presidida por Vittorio Corbo-, con el objeto de evaluar y proponer medidas de perfeccionamiento a la metodología del cálculo estructural y su arquitectura institucional. Entre las medidas propuestas estuvo la creación de un Consejo Fiscal (CF), coherente con las mejores prácticas internacionales en términos de política fiscal.

Así las cosas, el 2013 -mediante el decreto N° 545 del 2013-, se creó el Consejo Fiscal Asesor. Si bien este Consejo ha funcionado de manera permanente conforme a su mandato, no cuenta hoy en día con la suficiente autonomía, atribuciones ni recursos para lograr ejercer eficazmente su función, que asegure la adecuada implementación y efectividad de la regla fiscal.

En este contexto, el proyecto de ley ingresado recientemente por el Ejecutivo, constituye un importante avance. Se valora el gran avance que representa una institucionalidad fiscal más autónoma, más transparente y con más facultades, que contribuya a dar más certidumbre. Su éxito dependerá, en gran parte, de que sea validado por todos los sectores. La presencia de dos ex ministros de Hacienda en la presentación de este importante proyecto es una señal potente al respecto.

Se trata de un proyecto de ley a todas luces positivo, sin perjuicio de que hay ciertos espacios aún para perfeccionar esta institucionalidad, relacionada principalmente con la independencia del presidente del CFA respecto del ciclo político y de ampliar las atribuciones del CFA al monitoreo del presupuesto en relación a los ingresos y gastos efectivos, así como de los supuestos utilizados 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

1. Se crea el Consejo Fiscal Autónomo (“CFA” o “Consejo”), como un organismo consultivo dependiente del Ministerio de Hacienda. Su objeto será promover el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.
2. El Consejo estará integrado por cinco miembros, expertos y de reconocido prestigio profesional o académico en materias fiscales y presupuestarias. El Presidente será designado directamente por el Presidente de la República, mientras que los otros cuatro consejeros serán designados por el Presidente, previo acuerdo del Senado. Durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos sólo por un nuevo periodo. Sus labores serán compatibles con el ejercicio profesional y labores académicas, e incompatible con los cargos de elección popular.
3. Se detallan las funciones y atribuciones del Consejo, que incluyen evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por la Dirección de Presupuestos; participar como observador en los procedimientos establecidos para recabar la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinen el nivel de tendencia de los ingresos y gastos del Gobierno Central; formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y/o procedimentales para el cálculo del Balance Estructural; manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de Balance Estructural y proponer medidas de mitigación; evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones; asesorar al Ministerio de Hacienda en las materias fiscales que éste le encomiende de manera expresa y que tengan relación con su objeto; realizar informes en relación a los estudios, análisis y otros temas que le competen, así como contratar estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
4. Se detallan las causales de cesación en las funciones de los miembros del Consejo, inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar dicho cargo, y la dieta que percibirán los consejeros. Asimismo, se establece que los consejeros deberán abstenerse de participar y votar cuando se traten materias o se resuelvan asuntos en que puedan tener interés.

5. Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, así como solicitar toda la información y documentos necesarios para revisar los asuntos de su competencia. La contraparte técnica del CFA será la Dirección de Presupuestos.
6. Se establece la obligación de dictar un reglamento mediante decreto supremo expedido a través de Ministerio de Hacienda, en el que se establezcan las normas de funcionamiento del Consejo y la forma en que éste se pronunciará.
7. El Consejo publicará los informes que prepare y la información o documentación que genere en el ámbito de sus competencias ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

ANTECEDENTES

Chile cuenta con una institucionalidad fiscal fuertemente influenciada por los estándares internacionales más exigentes, esto es, una regla de BE que determina la trayectoria del gasto y un CF cuyo rol es velar por la correcta estimación del BE. Sin embargo, el establecimiento de la regla de BE en 2001 y la posterior conformación del CF en 2013¹ no ha sido suficiente para asegurar el manejo responsable de las cuentas fiscales, llevando al gobierno chileno a presentar una deuda bruta a niveles no vistos desde principios de los años

noventa -producto de los sostenidos y crecientes déficits efectivos observados en los últimos años-. Por tanto, la existencia de un CF es una condición necesaria pero no suficiente, ya que el diseño de su institucionalidad es fundamental.

Aún cuando se observa una fuerte heterogeneidad entre Consejos Fiscales a nivel internacional, hay elementos considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento de este ente fiscal. A continuación, se detallan los principales elementos y se abordan sus concreciones en el proyecto de ley.

Elemento esencial de cualquier CF	Proyecto de Ley
Fomentar la autonomía operacional ² , financiera y de gestión ³ del Consejo, que le permita asegurar una plena independencia del gobierno, a través de financiamiento, selección de <i>staff</i> propio, así como de la implementación de un gobierno corporativo ad hoc.	En términos generales, se avanza en forma importante en la autonomía del CF, principalmente al sostener su institucionalidad a través de una ley y el otorgamiento de financiamiento propio para contratar estudios o asesorías. La propuesta es que cuente con cinco consejeros, cuatro de los cuales son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado y, el quinto, -quien además es presidente del Consejo- en forma directa por la autoridad presidencial ⁴ a comienzos de su mandato. Se mantiene la secretaría técnica en el Ministerio de Hacienda.

1 Siguiendo la recomendación de la Comisión Corbo. Corbo, V., R. Caballero, M. Marcel, F. Rosende, K Schmidt-Hebbel, R. Vergara y J. Vial (2011). "Propuestas para Perfeccionar la Regla Fiscal". Informe Final. Comité Asesor para el Diseño de una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para Chile.

2 En torno al 75% de los CF analizados cuenta con esta autonomía de acuerdo al Ministerio de Hacienda (2018).

3 En relación a la capacidad de gestión de los Consejos Fiscales, se evalúa el derecho a seleccionar su staff de trabajo y si cuentan con asignación presupuestaria a su disposición.

4 Actualmente los Consejeros son designados por decreto del Ministerio de Hacienda.

Elemento esencial de cualquier CF	Proyecto de Ley
Establecer objetivos claros y amplios de manera que le permita influir en el logro de una política fiscal responsable.	En términos generales, se amplían las funciones del CF. Se mantiene el carácter de organismo consultivo del Ministerio de Hacienda (no vinculante) asociado al BE. Pero se le agrega la función de manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas del BE y proponer medidas de mitigación; proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos para el cálculo del BE y evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas
Fomentar la transparencia de la política fiscal, la generación de informes públicos, participación en el debate público, dar cuenta de sus evaluaciones tanto al poder ejecutivo como legislativo, así como también a la ciudadanía.	Se incluye una función relacionada con la publicidad y la transparencia, indicando que el Consejo debe divulgar los informes que prepare y la información o documentación que genere en el ámbito de sus competencias, los que serán publicados y presentados ante el Congreso.

¿HAY ESPACIO PARA MEJORAS AL PROYECTO?

Sin duda las medidas incorporadas representan un gran avance en el perfeccionamiento de la institucionalidad fiscal. Destaca, en particular, el avance en la autonomía legal y financiera. Sin embargo, quedan algunos espacios para mejoras adicionales. En particular:

I. Fomentar la autonomía:

- i. La metodología de nombramiento del presidente del Consejo podría dar pie a que no cuente con la debida independencia⁵ de la autoridad política. Al respecto, podría pensarse un sistema en que su nombramiento sea efectivamente por cuatro años, pero a partir

del segundo año de haber asumido un nuevo gobierno y que su designación la realice el Presidente de la República en forma directa o bien se pudiera evaluar que deba ser a partir de una terna propuesta por el Consejo del Banco Central.

- ii. Sería interesante evaluar si el nuevo CFA debiera contar con cierta capacidad instalada en cuanto a *staff* remunerado para la completa autonomía de su análisis, independiente de que cuente con recursos para contratar asesorías y si la secretaría técnica debiera ser independiente de la autoridad fiscal y radicarse en el *staff* del CFA y no en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, tal como está propuesto hoy.

II. Establecer objetivos:

- i. De acuerdo con la experiencia internacional, y con la necesidad de lograr efectivamente un manejo responsable de las finanzas públicas,

5 Rodrigo Valdés en columna de opinión en El Mercurio (24 de junio de 2018) y Andrea Repetto en entrevista en el Pulso (17 de junio de 2018).

se sugiere ampliar sus funciones más allá del sólo análisis del ajuste cíclico del BE, participando del proceso presupuestario a través de la evaluación de los ingresos y gastos efectivos estimados y los supuestos considerados.

- ii. Ser revisor y dar opinión respecto del cálculo de los costos financieros involucrados en las distintas iniciativas que impliquen un

aumento mayor del gasto público con impacto permanente en las finanzas públicas.

Adicional a la creación de este Consejo Fiscal Autónomo, también se sugiere complementar la actual regla de BE con una regla adicional, como por ejemplo, poner una cota máxima al nivel de la deuda pública como porcentaje del PIB. Chile es de los pocos países en el mundo que cuenta sólo con una regla⁶ ■■■

6 Grunwald, C. (2018). "Regla fiscal y su evolución". Serie Informe Económico. Libertad y Desarrollo.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Créase el Consejo Fiscal Autónomo, en adelante denominado indistintamente "Consejo"⁷, como un organismo consultivo⁸ dependiente del Ministerio de Hacienda.

El domicilio del Consejo será la ciudad de Santiago.

Los decretos supremos que se refieran al Consejo serán expedidos a través del Ministerio de Hacienda.

Artículo 2.- El Consejo Fiscal Autónomo tiene por objeto promover el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.

En virtud de lo anterior, el Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por la Dirección de Presupuestos, según la metodología, procedimientos y demás normas establecidas por el Ministerio de Hacienda, de conformidad al artículo 10 del Decreto Ley 1.263, sobre Administración Financiera del Estado.
- b) Participar como observador en los procedimientos establecidos para recabar la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinen el nivel de tendencia de los ingresos y gastos del Gobierno Central, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 10 del Decreto Ley 1.263, sobre Administración Financiera del Estado, así como revisar dichos cálculos y manifestar su opinión sobre los mismos.
- c) Formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y/o procedimentales para el cálculo del Balance Estructural.

7 Comisión Corbo sugirió que el CFA sea un organismo autónomo del Ejecutivo y del Congreso.

8 Comisión Corbo sugiere que el CFA sea en parte consultivo y en parte vinculante (por ejemplo, el CFA debiera proveer con carácter vinculante los supuestos y las proyecciones para las variables de ajuste cíclico).

- d) Manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de Balance Estructural y proponer medidas de mitigación.
- e) Evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones.
- f) Asesorar al Ministerio de Hacienda en las materias fiscales que éste le encomiende de manera expresa y que tengan relación con su objeto.
- g) Realizar informes en relación a los estudios, análisis y otros temas que le competen de acuerdo a esta ley, los que deberán ser presentados ante las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y publicados en la página web del Consejo.
- h) Contratar los estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 3.- El Consejo estará integrado por cinco miembros⁹, denominados Consejeros, expertos de reconocido prestigio profesional o académico en materias fiscales y presupuestarias, los que se nombrarán y sujetarán a lo siguiente:

- a) Un Consejero designado por el Presidente de la República, que tendrá el carácter de presidente del Consejo.

El presidente del Consejo deberá ser nombrado a más tardar dentro de los noventa días siguientes al inicio del período presidencial y durará en su cargo hasta el término de dicho período, salvo que concurra alguna de las causales de cesación de funciones establecidas en la presente ley.

- b) Cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.

Los consejeros designados de conformidad con lo dispuesto en este literal¹⁰ durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos sólo por un nuevo período consecutivo. Se renovarán en pares, cada dos años, según corresponda.

9 Comisión Corbo sugería un Consejo de 3 miembros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso. El presidente sería seleccionado entre los consejeros por el Presidente de la República. El Decreto actual del CFA señala que el Consejo estará integrado por cinco miembros designados por el Ministerio de Hacienda (el presidente será designado entre sus miembros por el Ministerio de Hacienda).

10 Comisión Corbo sugiere que los periodos de permanencia sean traslapados e independientes del ciclo presidencial. Actualmente, los integrantes del Consejo Fiscal Asesor son designados por los periodos que se indiquen, pudiendo ser nombrados por periodos sucesivos.

En el nombramiento de los consejeros a que se refieren las letras a) y b) del presente artículo se deberá velar de manera permanente por la conformación de un Consejo que equilibre la experiencia y conocimiento técnico que posean sus miembros.

El Consejo elegirá de entre sus miembros a un vicepresidente, quien subrogará al presidente en caso que este último se ausente o esté temporalmente imposibilitado de ejercer sus funciones.

Artículo 4.- Los miembros del Consejo cesarán en sus funciones por expiración del plazo por el que fueron nombrados, renuncia presentada ante el Presidente de la República por intermedio del Ministro de Hacienda, o falta grave al cumplimiento de las obligaciones como miembros del Consejo Fiscal Autónomo, calificada por el Presidente de la República, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento a que se refiere el artículo 11° de la presente ley. Para estos efectos, se considerará falta grave, entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas.

Asimismo, si una vez designado en el cargo sobreviniere a un consejero alguna de las incompatibilidades o inhabilidades señaladas en los artículos 5 y 6 siguientes, deberá informarlo inmediatamente al Consejo y al Presidente de la República, cesando inmediatamente en el cargo.

En caso de quedar vacante el cargo, deberá procederse al nombramiento de un nuevo consejero en la forma indicada en el referido artículo 3 precedente. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del consejero reemplazado.

Artículo 5.- El desempeño de las labores de consejero será compatible con el ejercicio profesional¹¹ y labores académicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el cargo de consejero será incompatible con cargos de elección popular. Esta incompatibilidad regirá desde la inscripción de las candidaturas, mientras ejerza dicho cargo, y hasta cumplidos seis meses desde la fecha de la respectiva elección o cesación en el cargo, según correspondiere.

11 La Comisión Corbo sugirió que el presidente del Consejo tenga un cargo de tiempo completo, mientras que los dos restantes podrían trabajar a tiempo parcial y realizar actividades profesionales.

Artículo 6.- No podrán desempeñarse como miembros del Consejo:

- a) Los menores de edad;
- b) Las personas que hubieren sido condenadas por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, por delitos de prevaricación, cohecho y, en general, aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contemplados en la ley N° 18.045, de Mercado de Valores y, en general, por delitos contra la fe pública; y
- c) Las personas que tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Si alguno de los miembros del Consejo hubiere sido acusado de alguno de los delitos señalados en la letra b) precedente quedará suspendido de su cargo hasta que concluya el proceso por sentencia firme.

Artículo 7.- Los Consejeros percibirán una dieta equivalente a doce unidades de fomento por cada sesión que asistan con un máximo de setenta y dos de estas unidades por mes calendario.

El Presidente percibirá igual dieta, aumentada en un 50%.

Artículo 8.- Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, así como solicitar toda la información y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. Sin perjuicio de lo anterior, para todos los efectos a que hubiere lugar, la contraparte técnica del Consejo será la Dirección de Presupuestos.

Del mismo modo, el Consejo podrá celebrar convenios con instituciones académicas o corporaciones sin fines de lucro, para que éstas presten la asistencia profesional necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 9.- Al Presidente del Consejo le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

- a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;

- b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo, de conformidad con las directrices que defina el Consejo;
- c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo;
- d) Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Consejo;
- e) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo.

Artículo 10.- El Consejo sesionará con la asistencia de al menos tres de sus miembros, debiendo adoptar sus acuerdos con el voto favorable de la mayoría de los asistentes. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la reunión.

Participarán en forma permanente en las sesiones del Consejo, con derecho a voz, un representante del Ministerio de Hacienda, así como un representante de la Dirección de Presupuestos. Cuando lo estime necesario, el Consejo podrá invitar a otros expertos y especialistas a sus sesiones, los cuales tendrán derecho a voz.

Los consejeros deberán abstenerse de participar y votar cuando se traten materias o se resuelvan asuntos en que puedan tener interés. Además, deberán informar al Consejo el conflicto de intereses que les afecta.

Para estos efectos, el reglamento del Consejo a que se refiere el artículo 11 siguiente establecerá la forma en que deberá efectuarse la citación a reunión y la frecuencia¹² mínima de su celebración.

Artículo 11.- Se dictará un reglamento mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, en el que se establecerán las normas de funcionamiento del Consejo y la forma en que éste se pronunciará públicamente.

Artículo 12.- El Consejo publicará los informes que prepare y la información o documentación que genere en el ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de guardar secreto o

¹² El CFA actual establece que el Consejo deberá sesionar al menos una vez por semestre, previa citación del Ministro de Hacienda y cada vez que éste lo convoque.

reserva, se estará a lo dispuesto por el artículo 21¹³ de la ley N° 20.285, sobre acceso a la Información Pública.

Artículo 13.- En el ejercicio de sus funciones los miembros del Consejo no podrán divulgar información que no haya sido publicada de acuerdo a las formas y procedimientos establecidos para ello en el reglamento a que se refiere el artículo 11 precedente.

La infracción a la obligación establecida en el inciso anterior será sancionada con las penas previstas en los artículos 246¹⁴ y 247¹⁵ del Código Penal, cualquiera sea la calidad o estatuto que le sea aplicable al infractor.

13 Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
 - a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
 - b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.
 - c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

14 ART. 246.

El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente.

Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales.

Las penas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán, según corresponda, al empleado público que indebidamente anticipare en cualquier forma el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados.

15 ART. 247.

El empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Las mismas penas se aplicarán a los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelen los secretos que por razón de ella se les hubieren confiado.

Artículo 14.- El patrimonio del Consejo estará formado por:

- a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público;
- b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero Transitorio.- Los actuales integrantes del Consejo Fiscal Asesor, creado por el decreto N° 545 de 2013 del Ministerio de Hacienda, continuarán en sus funciones hasta la designación de los consejeros de conformidad al artículo Segundo Transitorio siguiente.

Artículo Segundo Transitorio.- La primera designación de consejeros del Consejo Fiscal Autónomo, se hará a los sesenta días de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. En la propuesta que se haga al Senado se identificará a los consejeros que durarán dos y cuatro años en sus cargos, respectivamente.

Artículo Tercero Transitorio.- Los gastos que irrogue el adecuado funcionamiento del Consejo se harán con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente sin perjuicio de recursos que se otorguen por leyes especiales.



